



Presidente de los ricos, temporada 2. Por Thomas Piketty.

Posted on Marzo 6, 2023

En 2023, ¿Emmanuel Macron volverá a caer en la era equivocada al presentarse como presidente de los ricos? Desafortunadamente, esto es lo que nos espera con la reforma de pensiones. Durante su primer mandato, ya había optado por centrarse en el “primero de la fila” y la supresión del impuesto sobre el patrimonio. El resultado fue un poderoso sentimiento de injusticia que desembocó en el movimiento de los “chalecos amarillos (o chalecos amarillos)”, hartos de los nuevos impuestos sobre los combustibles que les obligaban a pagar mientras los más ricos recibían cheques. En solo unos meses, el gobierno ha logrado así socavar permanentemente la idea misma de un impuesto al carbono en Francia que, para ser aceptado, tendría que eximir a los más modestos y requerir esfuerzos proporcionalmente mucho mayores de los más ricos.

En general, resolver el desafío climático requiere la construcción de nuevos estándares colectivos de justicia social y fiscal. La subida de los precios de la energía, la exclusión de vehículos contaminantes, el paso a la electricidad total, la renovación acelerada de viviendas, etc., ejercerán una presión cada vez mayor sobre las clases trabajadoras y medias. Sin mencionar que también habrá que encontrar recursos para invertir más en salud y capacitación, que es la clave para una economía productiva y sostenible. Para preservar la cohesión social, será fundamental gravar a los más ricos, y esto deberá hacerse sobre la base de indicadores objetivos y visibles como la renta y la riqueza.

Más que nunca, vivimos en un mundo que necesita justicia y transparencia. Solo hay que encender internet o abrir una revista para saber que a los millonarios y ejecutivos les va maravillosamente bien. En Francia, las 500 mayores fortunas han pasado en diez años de 200 mil millones a 1000 mil millones de euros. Con gravar este aumento excepcional de la riqueza al 50% sería suficiente para generar 400 mil millones. El tamaño del fondo de impuestos disponible sería aún mayor si ampliáramos el enfoque a los 500.000 contribuyentes más ricos (1% de la población) o al 10% o 20% más rico. Todos estos grupos deberán ser gravados en forma graduada, según principios de justicia que deberán ser debatidos abiertamente, comenzando desde arriba. Todo el mundo conoce estas realidades e injusticias hoy, al menos tan bien como en la época de la Revolución y los privilegios de la nobleza. No tiene sentido pretender que no hay nada sustancial que esperar de este lado. Repetir una y otra vez que el impuesto sobre el patrimonio (ISF) generó menos de 5.000 millones de euros equivale a tomar a los ciudadanos por tontos: este bajo rendimiento refleja la elección de los sucesivos gobiernos de eximir a los multimillonarios y confiar en autodeclaraciones falsas, y Es precisamente esta elección la que debe ser cuestionada. Es abordando el tema de la justicia como saldremos de la crisis actual. y es precisamente esta elección la que debe ser cuestionada. Es abordando el tema de la justicia como saldremos de la crisis actual. y es precisamente esta elección la que debe ser cuestionada. Es abordando el tema de la justicia como saldremos de la crisis actual.

Sin embargo, con la reforma de las pensiones, el gobierno se prepara para hacer justo lo contrario. El objetivo declarado es lograr un ahorro de 20 mil millones por año para 2030, con el fin de financiar las otras prioridades del gobierno. El problema es que esos 20.000 millones recaerán íntegramente sobre los hombros de los más modestos. Actualmente, para recibir una pensión completa se necesitan dos condiciones: la edad legal de 62 años y el tiempo de cotización requerido, que es de 42 años para los nacidos en 1961-1962 (y aumentará gradualmente a 43 para la generación de 1973). Tomemos a una persona nacida en 1961 que, por lo tanto, cumplirá 62 años en 2023. Si ha estudiado hasta el nivel de una maestría y comenzó a trabajar a los 23, entonces ya tendrá que esperar hasta los 65 para cumplir 42 años de servicio pensionable. En otras palabras, la reforma consistente en retrasar la edad legal a 64 ó 65 años no tendrá por definición ningún impacto en estas personas. De los 20 mil millones, los más educados contribuirán exactamente con cero centavos. Por construcción, estos 20.000 millones se los quitarán íntegramente al resto de la población, en particular a los trabajadores y empleados, que son también los que tienen la menor esperanza de vida y que ya padecen un sistema profundamente injusto, ya que son sus aportaciones las que financian la pensiones de ejecutivos con alta expectativa de vida.

El gobierno puede tratar de disfrazar las cosas: la realidad es que ha inventado un impuesto regresivo que se impondrá exclusivamente a los menos calificados. Cuando Elizabeth Borne anuncia que nadie tendrá que cotizar 47 o 48 años de servicio pensionable, solo está admitiendo que algunos cotizarán a los 45 o 46 años, es decir, aquellos que comenzaron a trabajar a los 19 o 20 años y que a menudo trabajan en dificultades. trabajos. Por definición, todas las medidas de mitigación solo pueden ser financiadas por los menos educados. Esta realidad es tan evidente que la reforma ha unido contra ella no sólo a la izquierda

sino también a la mayor parte de la derecha: la RN (Rassemblement National) por supuesto, pero también una parte creciente de la LR (Les Républicains)

En cuanto al argumento de que no tenemos más remedio que seguir a nuestros vecinos, es particularmente débil. En primer lugar, porque los sistemas extranjeros en realidad combinan múltiples parámetros y son más complejos de lo que se afirma. En segundo lugar, el hecho de que ningún país haya tenido debidamente en cuenta las abismales desigualdades sociales en la jubilación no justifica que se siga así. ¿Es el hecho de que las desigualdades salariales de género existan en todas partes una justificación para no hacer nada al respecto? Es hora de que el sistema de pensiones se centre en las pensiones pequeñas y medianas, con un servicio público de dependencia que permita a todas las personas terminar la vida con dignidad. Los medios existen para esto. Esperemos que los diputados y el movimiento social logren convencer al gobierno de esto.

Por Thomas Piketty, economista francés especialista en desigualdad económica y distribución de la renta. Desde el año 2000 es director de estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Economía de París.

Fuente: Artículo tomado del Blog de Thomas Piketty, Le Monde.

Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de elmaipo.cl.